

La guerra que no dice su nombre

Arturo Anguiano

Muy significativa resulta la demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya contra el presidente Felipe Calderón Hinojosa, algunos funcionarios civiles y militares de su gobierno y contra jefes narcotraficantes del poderoso *cártel* de Sinaloa, todos acusados de *delitos de lesa humanidad* en la pretendida guerra contra el crimen organizado que ha afectado gravemente a México durante los últimos cinco años. Con más de 23.000 firmas de respaldo, el abogado mexicano Netzaí Sandoval destacó el “*contexto generalizado de violencia sistémica que ha llevado a México a una crisis humanitaria, con más de 50 mil personas ultimadas, 230 mil desplazados y 10 mil desaparecidos*”¹. Es, precisamente, el saldo públicamente reconocido, hasta ahora, del desfalleciente gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) que en 2006 se impuso luego de un fraude electoral que anuló en definitiva las esperanzas democráticas suscitadas por la derrota, en año 2000, del decadente régimen de la Revolución mexicana, que durante más de 70 años sostuvo el monopolio del poder.

A pocos meses de las elecciones nacionales en vistas a la sucesión presidencial de 2012, la situación política del país se caracteriza por la profundización de la descomposición política y la degradación social a causa, sobre todo, de la militarización y la *violencia ambiente* que el gobierno de Calderón ha puesto en práctica y estimulado desde el inicio de su gestión. La violencia verbal y publicitaria que Calderón desplegó en 2006, durante su campaña electoral como candidato a la Presidencia de la República, tuvo su desenlace en la violentación de las elecciones mediante el fraude en las urnas y se reprodujo en su brusca toma de protesta (en un Congreso en revuelta, forzado a escucharlo) y en sus primeros pasos ya como jefe del Estado, rodeado siempre en forma ostentosa por los militares (Anguiano, 2010a).

La pérdida de legitimidad de las instituciones estatales, acelerada durante el gobierno del panista Vicente Fox Quesada (2000-2006), se ahondó con el controvertido resultado de las elecciones de 2006 y durante el gobierno de Felipe Calderón que arrancó con un déficit de legitimidad y en una atmósfera política enturbiada por la persistencia patente de los viejos vicios característi-

¹ *La Jornada*, 26/11/2011. Se responsabiliza al Estado mexicano por crímenes de lesa humanidad como violaciones sexuales perpetradas por elementos del Ejército, secuestro y “esclavización” de migrantes indocumentados por funcionarios en colaboración con grupos de delincuentes, homicidios de civiles en retenes militares, desapariciones forzadas, uso de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Mientras que se señala que los grupos delictivos han afianzado un extenso control territorial, con ejércitos propios que han realizado incontables ejecuciones, amputaciones, decapitaciones e incluso el reclutamiento de menores de edad y ataques contra objetivos civiles.

“ El propósito central de la guerra de Calderón no es acabar con el narcotráfico, sino destruir el tejido de la sociedad. Paralizar por el temor, el miedo. Gobernar por medio de estos instrumentos”

cos del antiguo régimen, simbolizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el *PRI-Gobierno*, pretendidamente derrotado. Los llamados tres poderes de la *República ilusoria* que pervive en México (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los poderes fácticos tales como las centrales patronales, la jerarquía eclesiástica católica y los medios masivos de comunicación, salieron mal librados de la larga ofensiva de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, jefe del gobierno de Distrito Federal, en la cual todos ellos se implicaron con el propósito de anularlo primero como candidato

presidencial y luego para derrotarlo en las elecciones. Pero también se evidenciaron por poner en práctica, propiciar o avalar la judicialización de la política y la criminalización de lo social (resistencias, organización y hasta formas de trabajo) que caracterizaron al primer gobierno pospriísta. Todo el poder del Estado y de la oligarquía del dinero, representados por un poder mediático avasallador y sin precedentes, no lograron empero reproducir ni garantizar el sometimiento resignado de amplias capas de la sociedad, de las clases, pueblos y comunidades que la componen. En general, abuso de poder, deslavamiento del Estado laico, intolerancia y represión contra disidentes y luchas sociales, fraude electoral, enriquecimiento desmesurado de pocos, sinónimo de precarización generalizada de la economía y una corrupción socializada reproducida en forma ampliada durante el derechista y ultramontano gobierno de Fox -alcanzando a todos los destacamentos de la clase política ampliada y sus partidos- dejaron un país exhausto, en extremo polarizado en todos los terrenos.

En esas condiciones prácticamente caóticas (de ingobernabilidad según el nuevo léxico a la moda), Felipe Calderón inició el segundo gobierno del PAN en forma vacilante, desacreditado de entrada y con el pesado lastre del primer sexenio panista, que paradójicamente lo elevó a la cima del Estado al tiempo que lo dejó en la intemperie, desprotegido ante el enojo, la rabia, de una sociedad mayoritariamente desilusionada y en desconcierto.

Legitimación por la guerra

De manera sorpresiva, sin que hubiera sido uno de los ejes de su programa o de su campaña por la presidencia, Calderón lanzó su gobierno con un ataque frontal al narcotráfico, *declarándole la guerra* por medio de operativos militares que se reprodujeron a lo largo y lo ancho de la geografía nacional, sacando a las calles de las ciudades alrededor de 60 mil efectivos. Si bien el llamado crimen organizado había crecido desde los años

ochenta, en realidad su existencia y sus implicaciones envolventes vienen de lejos, con muchas aristas y nunca fueron ajenos a los gobiernos, al aparato estatal ni mucho menos a la oligarquía del dinero. Funcionarios gubernamentales, policías, militares, agencias aduanales, juzgados, bancos, etc., se vieron involucrados de distintas maneras y niveles con los cárteles de la droga, muchos de ellos integrados o comandados incluso por antiguos militares o policías (véase, por ejemplo, Osorno, 2009 y Ravelo, 2011). Estados Unidos y México establecieron relaciones conflictivas al respecto, involucrando de diversa forma distintas instancias estatales de ambos gobiernos. Colaboraciones, desconfianzas, golpes bajos, infiltraciones y complicidades, muchas historias se han desarrollado (y no dejarán de desarrollarse) al respecto.

Se trata de un fenómeno que se enraizó en el país a través de los años debido en gran medida a la manera como la corrupción (incluso socializada) se convirtió desde siempre en un rasgo no sólo del régimen patrimonialista y su funcionamiento, sino en parte de la cultura priísta, de la cultura nacional, que ha arraigado duradera y hondamente en nuestro país. Se liga asimismo a la economía desigual y las estrategias neoliberales que han pauperizado a amplias capas de la población, condenándolas al desempleo (en particular a los jóvenes, donde se ubican cerca de ocho millones de “*ninis*”, que ni estudian ni trabajan), dejándolas sin expectativas.

Así, queda claro que la existencia del narcotráfico ha sido en efecto un fenómeno persistente en la realidad mexicana que por lo demás se caracteriza por sus vinculaciones y derivaciones internacionales cada vez más diversificadas y extensas. Combatido en forma errática por los distintos gobiernos, en realidad su crecimiento explosivo coincide y es parte de la mundialización neoliberal del capitalismo, de la apertura irrestricta de los mercados que no dejan de asumir un carácter planetario. El mercado de la droga, como el de las armas o la economía informal, son formas perversas del capitalismo que sin embargo generan enormes ganancias. De hecho, los cárteles del narcotráfico tienen el doble carácter de asociación criminal y empresa capitalista, de ahí sus vinculaciones fundamentales (sus complicidades clandestinas) con otras empresas formales como los bancos requeridos para la “legalización”, el lavado, de los flujos de ganancias de aquellos y su consiguiente reciclamiento. Se trata, entonces, de un problema global que no puede resolverse en un país como México, que no es más que una estación de paso hacia el mercado voraz al que la mayoría de sus productos son dirigidos: Estados Unidos.

Por ello resulta aparentemente inexplicable que el presidente Felipe Calderón convirtiera la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado en la estrategia fundamental de su gobierno, la que en los hechos ha condicionado el conjunto de la gestión estatal, convirtiéndolo-

se en el signo distintivo del panismo en el poder. Esa guerra *no se le impuso* a Calderón, no fue resultado de una crisis específica relacionada con algún salto cualitativo de la acción del crimen organizado que hubiera sucedido al tiempo que ocupaba Los Pinos y que requiriera por consiguiente, sin remedio, cambiar en forma radical las prioridades gubernamentales. Estamos, más bien, ante una guerra que no dice lo que es, que se disfraza, que precipita al país en una situación dominada mayormente por el desasosiego y la incertidumbre. Es una *apuesta* de Calderón preñada de consecuencias devastadoras y de largo plazo (Anguiano, 2011)/2.

Sobre todo, lo que ha sido ampliamente criticado, la pretendida guerra contra el narcotráfico sólo apunta a lo más evidente que es la producción y tráfico de drogas hacia Estados Unidos sin atacar las causas de fondo que podrían desmantelar a ese negocio rentable/3.

Es, entonces, una suerte de huida hacia adelante, de fuga ante una *situación de crisis política* acarreada por la manera fraudulenta como se convirtió en presidente de la República y la consiguiente crisis de legitimidad de las instituciones estatales que trajo consigo, que profundizó. Esta “guerra del poder”, como advirtió el Subcomandante Insurgente Marcos, la hizo Calderón “*para distraer la atención y evadir el masivo cuestionamiento a su legitimidad* (SCI Marcos, 2011)”/4. Es otra forma de la política del Estado (Aguirre Rojas, 2011), una expresión degradada de la incapacidad de formular alternativas a la crisis estatal que no cesa.

2/ Diego Osorno (2009, p. 303) destacó la importancia del contexto político-social en la decisión del nuevo presidente: “*el contexto -la rebelión en Atenco y Oaxaca, la Otra Campaña lanzada por el EZLN, la crisis interna del sindicato de trabajadores mineros y, principalmente, las movilizaciones masivas encabezadas por López Obrador- fue un factor determinante para el anuncio de ‘la guerra contra el narco’, con la cual Calderón convertiría al narco, un problema recurrente de la administración pública en los últimos 100 años, en el gran y maligno enemigo que, al enfrentarlo, pudiera legitimar un gobierno cuestionado desde su origen*”.

3/ Ravelo detalla cómo los gobiernos mexicanos incumplen las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir el lavado de dinero ni cumplen tampoco compromisos internacionales contraídos a través de la Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la Delincuencia Organizada (Palermo) y apenas cumple muy pocas cláusulas de la Convención contra la Corrupción (Mérida) (2011, pp. 78 y ss). Acaban de darse a conocer datos significativos: “*Durante los últimos dos gobiernos federales el crimen organizado lavó en el país más de 46 mil 500 millones de dólares producto de actividades irregulares, revelan informes del Banco de México (BdeM). Sólo en el actual sexenio, con todo y guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, se tienen identificados recursos por 31 mil 325 millones de dólares, que se presupone tienen origen en actividades ilícitas*” (La Jornada, 29/11/2011).

4/ Casi se puede sostener que hay un consenso en el sentido de que la guerra contra el narcotráfico fue una decisión política en busca de legitimación. Además de Osorno y Ravelo, Chabat (2010) y el trabajo de dos antiguos funcionarios del gobierno de Fox: Aguilar y Castañeda (2009, p. 13): “*la razón primordial de la declaración de guerra del 11 de diciembre de 2006 fue política: lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas y los plantones, a través de la guerra en los plantíos, las calles y las carreteras, ahora pobladas por mexicanos uniformados*”.

Seguridad, inseguridad y miedo

El viraje hacia la guerra fue al inicio un elemental lance en busca de reconocimiento a través de acciones de fuerza, sacando a la calle al Ejército revestido ilegalmente con funciones policíacas (condenando de entrada a las distintas policías y a todo el aparato de procuración de justicia que parecieron como incompetentes y sospechosos)⁵, pero de inmediato la situación se le fue de las manos al presidente, y la violencia impuso su propia lógica arrolladora.

Proclamando el objetivo prioritario de *restablecer la seguridad* que sus propias acciones no han dejado de empeorar y generalizar, en realidad solamente busca desesperadamente un consenso social, un reconocimiento que no alcanza, sino todo lo contrario. Operaciones judiciales fallidas, criminalización de la disidencia y las resistencias sociales, enfrentamientos frecuentes y casi siempre inesperados entre las fuerzas paramilitares (cárteles de la droga) y militares (incluida la Marina, también empujada a la guerra fuera de su ámbito natural y sus funciones), retenes y operaciones militares selectivas y masivas, torturas y desapariciones forzadas han dejado *una larga estela de violaciones reiteradas de los derechos humanos*, que en lugar de legitimar al gobierno, han potenciado el desprestigio de las fuerzas armadas, que invariablemente aparecen como arbitrarias, prepotentes, turbias y por encima de legalidad⁶.

El gobierno del Partido Acción Nacional (PAN), así, le apostó a la *seguridad* que convirtió en el signo definitivo de su sexenio, canalizando recursos económicos y de todo tipo cada vez más desproporcionados (como lo señala el Sup Marcos en el texto citado), con lo que introduce una tendencia inédita que será muy difícil revertir y no dejará de tener consecuencias duraderas y de fondo tanto en el carácter de las fuerzas armadas como en su papel a futuro en el Estado. Pero más que una guerra para rescatar e imponer la seguridad perdida en ciertas regiones o estados sensibles por las acciones del crimen organizado, lo que ha hecho el presidente es *generalizar la inseguridad en todo el país*.

La presencia masiva del Ejército en las calles de las ciudades y en todo tipo de lugares altera la vida de la gente, que más que sentirse protegida se siente amenazada y sufre toda clase de controles, ultrajes y represalias sin que dismi-

⁵/ El general en retiro, antiguo funcionario de seguridad de varios gobiernos priístas y exgobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea (2011, p. 200), escribe sobre Calderón: “la motivación inicial de su estrategia de seguridad consistió en dar un golpe de fuerza autoritaria que evidenciara la dureza de su presidencia, pero incurrió en errores y omisiones. Por principio de cuentas, no formuló ningún cálculo de probabilidades para su guerra. Sus policías propiamente no existen y sus fuerzas Armadas están diseñadas para otras circunstancias”.

⁶/ En una investigación reciente realizada en varios estados críticos (Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco), Human Rights Watch (2011) concluye: “En vez de reducir la violencia, la guerra contra el narco ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”.

“ La criminalización de resistencias y luchas sociales y la supuesta guerra contra el narcotráfico están agudizando la crisis del Estado y el régimen político”

nuya la presencia igualmente amenazante y letal del crimen organizado. La arbitrariedad, los montajes y las mentiras de los militares y del gobierno (verdaderas *performances* como dice Diego Osorno), reforzados con el aval indiscriminado y apabullante de los medios de comunicación, son otra cara de la guerra de Calderón que en el fondo se ha dirigido a *expandir el miedo*, a generar entre distintas capas sociales un *consenso temeroso* ante la ausencia de un

consenso social efectivo. Pero mientras más la guerra avanza, incluso las clases privilegiadas van resintiendo sus consecuencias, las que no dejan de entrelazarse con una economía en extremo polarizada y raquíca que si bien los ha enriquecido, va de la crisis al estancamiento. Más todavía, cuando ni los crímenes ni los trasiegos de droga se detienen y las víctimas de la sociedad y las violaciones de los derechos humanos se multiplican.

El Estado aparece en consecuencia como el *administrador de la inseguridad impuesta por el miedo*. El presidente Calderón parece haber aprendido de la experiencia de George W. Bush que a través de pretendidas amenazas catastróficas, propaganda mediática orquestada y mentiras de Estado impuso una guerra contra Irak que le permitió asentar y acrecentar su poder (revestido de mayor violencia e ilegalidad) en Estados Unidos y en el planeta bajo la promesa de la gestión de la inseguridad asentada en el miedo (Rancière, 2009, p. 124).

El propósito central de la guerra de Calderón -como lo apunta Sergio Rodríguez Lascano (2011): “*no es acabar con el narcotráfico, sino destruir el tejido de la sociedad. Paralizar por el temor, el miedo. Gobernar por medio de estos instrumentos*”⁷. Ya el anterior gobierno del PAN, encabezado por Vicente Fox, desarrolló una ofensiva contra los movimientos sociales -y en general contra toda resistencia y oposición- imponiendo su criminalización y recurriendo a formas represivas masivas -como en Atenco y Oaxaca en 2006 (CCIODH, 2008)- características de la guerra de baja intensidad, que de Chiapas la fue extendiendo a otros Estados. Bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, Calderón ha desarrollado en tanto política de Estado la *promoción del miedo y la parálisis*, esto es el *conformismo*, el sometimiento resignado, la *inseguridad como modo de vida que requiere la protección estatal* y, por consecuencia, la intervención y la cotidiana presencia masiva y

⁷/ El Subcomandante Marcos (2011) escribe: “¿*Qué relaciones sociales se pueden mantener o tejer si el miedo es la imagen dominante con la cual se puede identificar un grupo social, si el sentido de comunidad se rompe al grito de ‘sálvese quien pueda’? De esta guerra no sólo van a resultar miles de muertos... y jugosas ganancias. También, y sobre todo, va a resultar una nación destruida, despoblada, rota irremediablemente*”.

generalizada de las fuerzas armadas/8. Las luchas reivindicativas contra la explotación, la precarización y el despojo, el rechazo a las mascaradas democráticas de la clase política y las exigencias de libertades usurpadas no caben en un México militarizado/9, sujeto a reglas arbitrarias y un Estado de sitio virtual. La vida nacional se trastoca en una atmósfera catastrofista reproducida noche y día por los medios (con su alcance cada vez más avasallador) y los gobiernos, dirigida a arrinconar a los distintos sectores sociales, a forzarlos a posponer sus demandas y acciones para dejar actuar libremente al gobierno en su guerra cada vez más envolvente, cada vez más invasora de la geografía del país o correr el riesgo, claro, de sumarse a la lista de damnificados colaterales.

La guerra contra el narcotráfico es solamente una de las guerras del gobierno, pues por todas partes lleva también a cabo una auténtica *guerra social* contra las condiciones de vida y el empleo, contra las comunidades despojadas de mil maneras de tierras y recursos naturales en favor del capital global, contra los migrantes nacionales y extranjeros, contra los jóvenes, las mujeres y quienes piensan diferente, contra los pueblos indios que no dejan de resistir recreando sus condiciones de organización y convivencia colectivas.

Estado policiaco y resistencias

La centralidad de la guerra del gobierno por fuerza conlleva un endurecimiento del autoritarismo, la *legalidad a modo* (¿la justicia?), las libertades acotadas y la violación recurrente de los derechos humanos. Como siempre, el *Estado de derecho* se deja como una simple aspiración a futuro, mientras el *Estado de excepción* y sus reglas arbitrarias se justifican por la situación de guerra, instaurada como fallida forma de legitimación de un régimen político que hace agua por todos lados. La Constitución, las leyes, las normas y la justicia se violentan más que nunca y el conjunto de las instituciones estatales prosiguen su acelerada degradación.

Avanza una suerte de “Estado penal de control a medida que se reduce el Estado social”, como señala Rodríguez Lascano. Aunque en México difícilmente puede decirse que hubiera existido en algún momento un auténtico Estado social, lo cierto es que desde los ochenta se fueron desmontando prestaciones, logros y reformas sociales que mal que bien posibilitaron durante cierto tiempo no pocas seguridades (prestaciones laborales, apoyos materiales y subsidios al ritmo que imponían las relaciones clientelares y corporativas) y, por lo mismo, una sobrevivencia de amplias capas de la población muy por

8/Carlos Fazio (2011) habla de la creación deliberada de “un clima disciplinador que presentaba como aparentemente ineludible la adopción de medidas cada vez más coercitivas, de legislación especial propia de un régimen de excepción”.

9/Aunque el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) inició la militarización de la seguridad interior nutriendo las corporaciones policiacas con soldados, no deja de ser significativo que los dos gobiernos panistas fueron quienes dispararon el gasto en el sector e impulsaron un proceso de militarización de las estructuras estatales y gubernamentales que será difícil revertir (Alvarado y Zaverucha, 2010).

encima de la precarización generalizada que el capitalismo neoliberal ha acarreado. Parodiando a Rancière (2009, p. 125), podemos decir: “*Ahí donde la mercancía reina sin límites..., la forma de consenso óptimo es la que está cimentada por el miedo de una sociedad agrupada en torno al Estado guerrero*”; cuando el Estado ‘mínimo’ abandona sus funciones de intervención social y deja libre curso a la ley del capital, aparece “*el Estado reducido a la pureza de su esencia, o sea el Estado policiaco*”. Y remata contundente: “*La comunidad de sentimiento que sostiene este Estado, y que administra en su provecho, es la comunidad del miedo*”.

La criminalización de resistencias y luchas sociales y la supuesta guerra contra el narcotráfico están agudizando la crisis del Estado y el régimen político que -como vemos- se alejan cada vez más de una reconfiguración democrática; abandonaron en definitiva la búsqueda de la estabilidad asegurada por procesos políticos libres y optaron por reafirmar la dominación revestida con la protección burda y amenazante del Ejército. Tratan de imponerse mediante la gestión del desorden y la inseguridad.

Pero el miedo promovido desde arriba está siendo vencido en todas partes debido a la indignación que brota abajo ante los métodos de la guerra y sus consecuencias sociales devastadoras. Se van rehaciendo nuevas solidaridades y redes sociales que en las peores condiciones y a contracorriente denuncian las campañas de desinformación y manipulación de medios de comunicación amalgamados al poder y develan sus mentiras, sus montajes y fines ocultos. En este sentido abonó la propuesta de la mencionada primera carta del Sup Marcos, quien retomó la campaña de *No más sangre* lanzada por varios caricaturistas encabezados por Rius, emplazó a la clase política, organizada en distintos partidos, a dejar de apostar al desastre en su disputa por el poder en 2012 y propuso la posibilidad de un gran movimiento plural que pudiera detener la guerra de Calderón.

La movilización nacional que ha logrado articular el poeta Javier Sicilia, luego del asesinato de su hijo Juan Francisco y tres de sus compañeros en Morelos el pasado mes de marzo -que fue la gota que derramó el vaso de la rabia contenida-, comenzó a articularse bajo la forma de un Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad (MNPJD) con claros ecos zapatistas. Una primera manifestación multitudinaria el 6 de abril, sin precedente en Cuernavaca, fue seguida por la Marcha del Silencio desde ese lugar hacia a la ciudad de México, reuniendo una gran concentración plural en el Zócalo el 8 de mayo. Luego se realizaron caravanas cargadas de simbolismo atrayendo no sólo a inconformes sino igualmente a familiares y numerosas víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Primero se recorrió el centro y el norte del país rumbo a Ciudad Juárez (el “epicentro del dolor”), realizando una reunión nacional que desembocó en la firma de un Pacto Nacional por la Paz/10. Más

10/ Los objetivos fueron: esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas; poner fin a la estrategia

tarde hacia el sur y el sureste del país, encontrando en Oventic a los zapatistas. Recorrieron 26 Estados donde se encontraron con numerosas víctimas y familiares que se sumaron a miembros de comunidades eclesiales de base, agrupaciones ciudadanas y de derechos humanos, defensores de migrantes y desaparecidos, etcétera. En fin, lo más controvertido en los primeros siete meses a partir de su inicio, el Movimiento por la Paz entabló dos encuentros con el presidente Felipe Calderón en el Castillo de Chapultepec (junio y octubre 2011) y luego con representantes del poder legislativo.

En general, su objetivo fue visibilizar y reivindicar a nivel nacional a los miles de víctimas de la guerra que habían sido condenadas por el gobierno como criminales o cómplices del narcotráfico, romper en cierta medida el “cerco de la criminalización” y caminar hacia la justicia (<movimiento por la paz.mx>). El gobierno de Felipe Calderón, por supuesto, no ha dejado de refrendar su estrategia militar e incluso ha radicalizado su lenguaje, insistiendo en que no puede suspenderla pues el *narco* ha penetrado policías, gobiernos, etc., aunque sin realmente hacer nada al respecto; el gobierno norteamericano actúa con plena libertad en nuestro territorio a través de sus múltiples agentes y operaciones. El triunfalismo ciego y sin sentido del presidente choca con la tremenda realidad/11.

No cabe duda que el movimiento encabezado por Javier Sicilia ha sido la respuesta más importante lograda en contra de la guerra gubernamental, su lógica y sus secuelas devastadoras. Alentó sin duda muchas manifestaciones que por todas partes exigen el cese de la guerra, el cambio de la estrategia gubernamental y reivindican (nombran) a las víctimas al tiempo que combaten de más en más las violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército y las distintas fuerzas de seguridad. Se incrementan, incluso, las denuncias en el sentido de que no solamente no han disminuido los crímenes y acciones de los cárteles del narcotráfico, sino que incluso se han disparado incontroladamente los robos, los asaltos, las extorsiones, los secuestros y toda suerte de crímenes cometidos por las propias fuerzas que debieran encargarse supuestamente de la seguridad.

Las movilizaciones del MNPJD, no obstante su alcance y simbolismo, no han logrado cristalizar en un auténtico movimiento político social articulado y con visos de permanencia. Tampoco ha podido superar las dificultades que tra-

de guerra e implementar un enfoque de seguridad ciudadana; combatir la corrupción y la impunidad; combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; atención de emergencia a la juventud y acciones de recuperación del tejido social y democracia participativa (Casasús, 2011).

11/ “La guerra de Calderón ... no ha garantizado la seguridad de nadie... Lo peor de todo es que las redes criminales se extienden, cada vez con mayor poder, en todo el país y más allá del territorio nacional... Mediante el financiamiento, los narcotraficantes han logrado hacerse del poder político en municipios y entidades federativas... Han transcurrido más de cuatro años de guerra y 12 cárteles están en pie... Se trata de los cárteles de Sinaloa, Golfo, Tijuana, Juárez, Zetas, La Familia michoacana, Milenio, Pacífico sur, Organización Díaz Parada, La Resistencia, cártel de Guadalajara Nueva Generación y los hermanos Amezcua Contreras” (Ravelo 2001, p. 277).

ban la formación de una nueva organización, así fuera bajo la forma de una red de organizaciones y ciudadanos. Sus dirigentes incluso hablan ya de una “crisis de crecimiento” y de la necesidad de repensar su camino hacia la resistencia civil (Gil Olmos, 2011). De cualquier forma, el Movimiento por la Paz es uno de los componentes principales de las resistencias y luchas que no dejan de desarrollarse en México, en las peores condiciones, contra todas las guerras del Estado y la oligarquía del dinero. No han cesado de brotar a todo lo largo y ancho de la geografía nacional, lo mismo en comunidades y pueblos que en grandes ciudades y hasta en los centros de trabajo sujetos al despotismo desenfrenado (“desregulado”) del capital. Una verdadera revuelta cotidiana que, sin embargo, se reproduce fragmentada, las más de las veces aislada, en forma desigual, pero persistente (Anguiano, 2010b). El problema es justamente cómo encontrar la manera de vertebrar esas luchas, de potenciarlas y unificarlas, de ligar sus reivindicaciones singulares con demandas políticas generales como el fin de la guerra contra el narcotráfico, la reivindicación de los derechos humanos y las libertades democráticas y el combate contra la acción arrasadora del capitalismo neoliberal.

La atmósfera de inseguridad y el temor reproducidos por la guerra y la militarización no dejan de dificultar la articulación de las luchas y resistencias. La coyuntura electoral por la sucesión presidencial que de hecho se ha iniciado estará sobreterminada por esta situación y no se perciben propuestas unificadoras como la otra campaña que el EZLN puso en práctica en 2006. Los partidos políticos, la clase política toda, se alistan para las campañas bajo la lógica del autismo social, como si nada sucediera de extraordinario en el país. Javier Sicilia ha adelantado que, sin cambios, llegaremos a unas “elecciones de la ignominia”. Ya en las elecciones intermedias de 2009, núcleos de intelectuales promovieron el voto nulo en rechazo al conjunto de los partidos y la clase política. No dejarán de surgir propuestas y debates sobre opciones de fondo abajo y a la izquierda.

Mientras tanto, la guerra contra el narcotráfico, las guerras contra la sociedad no cesan. El Ejército y la Marina, que no están hechos ni autorizados para realizar labores policíacas ni combatir al crimen organizado, siguen en las calles haciendo lo que saben hacer, para lo que fueron entrenados y formados, combatir con una lógica de guerra, de aniquilamiento, a un enemigo difícil de ubicar, de delimitar, de destruir. Fuerzas armadas que debieran defender la soberanía, resguardar nuestras fronteras nacionales (tan porosas, tan franqueables), se encuentran en las calles en una *guerra civil* comandada por un presidente que no ha alcanzado la legitimidad, que acumula fracasos ante un fantasma que se potencia con sus golpes, y que se alista ante el inevitable hundimiento de su partido. Todas las “fuerzas del mal” convocadas y puestas en movimiento en forma perversa, lo arrastrarán en su debacle. Sólo queda prepararse para impedir el hundimiento de la nación dando a luz alternativas de cambio reales y duraderas.

Noviembre 2011

Arturo Anguiano es profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (México).

Bibliografía citada:

- Aguilar, R. y Castañeda, J. G. (2009) *El narco: la guerra fallida*. México: Punto de lectura Santillana.
- Aguirre Rojas, C. (2011) “La guerra, la política y la ética. Reflexiones sobre una carta”. México: *Rebeldía*, 77.
- Alvarado, A. y Zaverucha, J. (2010) “La actuación de las fuerzas armadas en la seguridad pública en México y Brasil: una visión comparada”. En A. Alvarado y M. Serrano (eds.) *Los grandes problemas nacionales*. T. XV. *Seguridad nacional y seguridad interior*. México: El Colegio de México.
- Anguiano, A. (2010a) *El ocaso interminable. Política y sociedad en el México de los cambios rotos*. México: Era.
- Anguiano, A. (2010b) “La revuelta cotidiana”. México: *Rebeldía*, 75.
- Anguiano, A. (2011) “Guerra, política, resistencias y alternativas (En torno al debate sobre ética y política)”. México: *Rebeldía*, 78.
- Carrillo Olea, J. (2011) *México en riesgo. Una visión personal sobre un Estado a la defensiva*. México: Grijalbo.
- Casasús, M. (2011) “La Caravana del Consuelo: origen y recorrido”. *Memoria*, 251, abril-septiembre.
- Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (2008) *Informe de los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca y Atenco*. Barcelona: CCIODH.
- Comité Cerezo (2011) México, *Saldos de la represión en México, 2009-2011. Una guerra contra el pueblo* <www.comitecerezo.org>.
- Chabat, J. (2010) “La respuesta del gobierno de Felipe Calderón al desafío del narcotráfico: entre lo malo y lo peor”. En A. Alvarado y M. Serrano (eds.) *Los grandes problemas nacionales*. T. XV. *Seguridad nacional y seguridad interior*. México: El Colegio de México.
- Fazio, C. (2011) “Terrorismo estatal e impunidad”. *La Jornada*, 17/12/2011.
- Gil Olmos, J. (2011) “El Movimiento por la Paz busca nuevos líderes”. México: *Proceso*, 1829, 20 de noviembre.
- Human Rights Watch (2011) “Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México”. *La Jornada*, 19/11/2011.
- Informe Bourbaki. *El costo humano de la guerra por la construcción de un monopolio del narcotráfico en México (2008-2009)* <movimientoporlapaz.mx>.
- Osorno, D. (2009) *El cártel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco*. México: De Bolsillo, Random House Mondadori.
- Rancière, J. (2009) *Moments politiques*. París: La fabrique éditions.
- Ravelo, R. (2011) *El narco en México. Historia e historias de una guerra*. México: Grijalbo.
- Rodríguez Lascano, S. (2011) “La clase política y la guerra”. México: *Rebeldía*, 77.
- Rodríguez Lascano, S. (2011) “2010: de la crisis de dominio a la organización independiente”. México: *Rebeldía*, 76.
- Sub Comandante Insurgente Marcos (2011) “Apuntes sobre las guerras (Carta primera a Don Luis Villoro Toranzo)”. México: *Rebeldía*, 76.

Web

<movimiento por la paz.mx>
<jornada.unam.mx>.